

Luego de la compra del Frigorífico Carrasco por parte de Minerva, nuestros gobernantes volvieron a la carga con sus temores sobre los riesgos que implica la concentración del poder por parte de las agroindustrias, el eventual riesgo de colusión y lo malo que esto puede representar para los intereses nacionales. Por el rango de quienes hacen esas declaraciones hay que tomarlas muy en serio, porque abarcan tanto al presidente de la República como al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca. En declaraciones al diario "El País", el 26 de marzo del corriente, el subsecretario en ejercicio de ministro de Agricultura, Ing. Agr. Enzo Benech, hace referencia a algunos conceptos que me parecen más que interesantes de destacar.

Empecemos por los conceptos que comparto con el ministro en funciones. Primero le preocupa la concertación de poder y los riesgos que esto tiene aparejado. Es saludable que las autoridades quieran proteger al más desposeído del poderoso (el tema es quién es el poderoso de turno). El segundo concepto que me parece interesante es el de la obtención del lucro por la actividad. Nuevamente, ese ha demostrado ser el mejor y mayor motor de crecimiento para el desarrollo económico. Tercer punto a favor, el concepto de justicia. Y aquí empiezan mis problemas con el que el señor Estado me diga lo que es justo. Yo comparto la búsqueda de la justicia, pero en mi universo eso está básicamente en manos de Dios, porque los hombres tienden a ver lo justo o injusto dependiendo del lado del mostrador en que se encuentren, y esto es así en toda transacción comercial. Lo que más me preocupa es que hablar de justicia en estas circunstancias es un acto de demagogia, para no decir nada y conformar a la tribuna.

Tomemos algún caso agrícola para preguntarles a las

autoridades sobre la justicia de quien tiene que ganar lo justo. Por ejemplo, luego de las catástrofes climáticas de febrero y con el tomate a 120 pesos el kilo, ¿quién gana lo justo: el productor, el distribuidor o el verdulero? Si ese era el precio del mercado (el clima que reduce la oferta), ¿por qué no salimos a hacer justicia con los que se quedan con el grueso del margen en desmedro del pobre y desposeído? Y a los productores de peras, manzanas y duraznos, ¿quién los cuida en términos de composición de precios en la distribución? Si al gobierno le preocupa la composición de los precios y los márgenes de utilidad por sector tiene otras cosas que mirar donde las concentraciones y el poder industrial son sensiblemente mayores a los de la carne.

El Estado no puede aplicar un concepto de justicia para unos sí y otros no. La justicia tiene que ser la misma para todos. Naturalmente que cualquiera entiende que el costo de desarrollarse es comerse algunos sapos de asegurar condiciones especiales para ciertos sectores, pero eso no quiere decir mirar para otro lado cuando las injusticias afloran. Y la solución en el caso de la industria frigorífica no pasa por un frigorífico nacional ni por uno a manos de los productores, porque ambos ya se ensayaron y fracasaron lastimosamente. Los empresarios no son suicidas en potencia, pero al Estado le cuesta entender eso porque él, como empresario, no compite con nadie sino que lo que sabe hacer es generar monopolios que terminan siendo ineficientes, caros y que se cierran sobre sí mismos.

Lo paradójico para mí es que veo al gobierno con una actitud bipolar frente a la creación de condiciones de mercados especiales. Por un lado, como ciudadano asisto al espectáculo de ir a buscar a un empresario privado para

que me acerque una solución al tema de la conectividad internacional, y eso es por el bien de todos, aunque sea a costa de darle un enorme poder de mercado. Con el hierro hacemos lo mismo: negociamos con uno (menor costo de transacción) y le cerramos el mercado al resto.

Ya es hora de que veamos las cosas con otro cristal. Discutiendo este asunto con un colega a quien respeto por ser la máxima autoridad en materia de carne bovina en Uruguay, me hacía notar que Brasil no viene a valorizar la marca Uruguay con la carne, sino a consolidar su papel hegemónico en el mundo de la proteína animal como lo hace en otros países de América Latina, a base de dinero y con el visto bueno de sus autoridades nacionales. Y nosotros dejamos hacer, pero siempre en ese discurso de dos caras: quiero a Brasil para que me dé desarrollo pero lo critico cuando se torna muy grande y poderoso.

Yo dormiría más tranquilo si me aseguran que nuestro gobierno tendrá la misma actitud vigilante de la justicia cuando los engordadores ganen mucho (ya les llegará) y la industria frigorífica nuevamente pierda dinero. Yo no le concedo al Estado la autoridad moral de decirme lo que es justo o no cuando él es juez y parte en actividades donde no me deja ver los costos y los beneficios de las transacciones. Somos dueños en el papel de empresas que no controlamos que crean nuevos monopolios a la sombra de controles eficientes y, sobre todo, amparados en un manto de igualdad y el mejor bien común. Por el momento prefiero dejar la justicia en otras manos.

() El autor es ingeniero agrónomo (Dr.), asesor privado y profesor de Agronegocios de la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República y de la Universidad ORT*